

Revista Andina de Estudios Políticos

REVISTA ANDINA DE ESTUDIOS POLÍTICOS

ISSN: 2221-4135 (Online)

URL: <http://revistas.ojs.es/index.php/revistaestudiosandinos/index>

Tel. : 051-1-431871

Fax: 051-1-431871

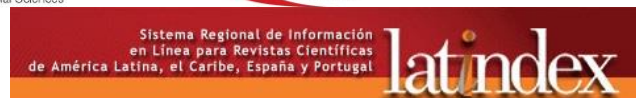
Dirección: Av. Arequipa N° 240 of. 101
Lima, Perú.

JIMÉNEZ, Catalina. (2013). La movilización estudiantil Colombiana: estructura de oportunidades y nuevos repertorios de acción. *Revista Andina de Estudios Políticos*, Vol. III, N° 2, pp. 32-55. ISSN: 2221-4135 [Online]

Artículo Publicado por: Instituto de Estudios Políticos Andinos (IEPA) en colaboración con:



Todos los derechos reservados



El presente producto está licenciado por Creative Commons. El Instituto de Estudios Políticos Andinos se reserva el derecho de publicación de los artículos. Cada uno de los artículos es publicado con los permisos correspondientes de los autores. La Revista Andina de Estudios Políticos es una plataforma OJS que garantiza la distribución del presente artículo de manera libre y gratuita.

LA MOVILIZACIÓN ESTUDIANTIL COLOMBIANA: ESTRUCTURA DE OPORTUNIDADES Y NUEVOS REPERTORIOS DE ACCIÓN

THE COLOMBIAN STUDENT MOBILIZATION: STRUCTURE OF OPPORTUNITIES AND NEW REPERTOIRES OF ACTION

JIMÉNEZ, Catalina
Universidad Externado de Colombia
magda.jimenez@uexternado.edu.co

RESUMEN

Durante el 2011 aparecen en Colombia acciones colectivas por parte de organizaciones estudiantiles que sacuden la dinámica de la participación política no convencional. Este artículo analiza a través de tres momentos claves, cómo la movilización estudiantil universitaria aprovechó la estructura de oportunidades políticas para plantear nuevas formas organizativas y repertorios de acción novedosos, que evidencian tendencias de cambio en la forma que es ejercida la protesta y demuestran una nueva forma en la que la institucionalidad colombiana entiende la movilización.

Palabras Clave: Acción Colectiva. Estructura de Oportunidad Política. Repertorios de Acción. Movilización Estudiantil. Formas Organizativas.

ABSTRACT

In 2011 appeared in Colombia collective actions by student organizations that shook the dynamics of unconventional political participation. This article analyzes through three key moments how the student mobilization seized the political opportunity structure to propose new organizational forms and innovative action repertoires which shows changing trends in the way the protest is exercised.

Keywords: Collective Action. Political Opportunity Structure. Action Repertoires. Student Mobilization. Organizational Forms.

Catalina Jiménez Jiménez: Maestría en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Salamanca. Docente-Investigador en la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia donde trabaja en temas como participación política, movimientos sociales, *accountability* social y procesos políticos latinoamericanos. Contacto: magda.jimenez@uexternado.edu.co.

LA MOVILIZACIÓN ESTUDIANTIL COLOMBIANA: ESTRUCTURA DE OPORTUNIDADES Y NUEVOS REPERTORIOS DE ACCIÓN

Introducción

El personaje del año 2011 fue el manifestante anónimo, aquel que puede estar en cualquier hora del día en las calles de Santiago, Túnez, Madrid, El Cairo, Nueva York o Bogotá, después de que la crisis económica ha ido debilitando los indicadores de calidad de vida de los países de renta alta y golpeando de forma importante a los de renta media y baja. Desde el 2009, la sociedad mundial fue testigo de los estragos de un modelo económico en crisis que golpeó de forma importante a los jóvenes universitarios, los cuales comprendieron que estudiar se convirtió en un asunto para privilegiados al no conducir a un empleo seguro y a la felicidad que el sistema incentivaba.

Esta coyuntura fue la estructura de oportunidad usada por distintos activistas para salir a la calle, ya que la gente marcha, se paraliza o grita, no cuando no tiene nada que perder sino cuando ha perdido la capacidad de obtener recursos (Tarrow, 1997). A pesar de que en América Latina se han presentado indicadores de crecimiento económico positivo, graves deficiencias en cobertura y calidad en los servicios públicos estatales se han convertido en un dispositivo para la protesta, particularmente entre el sector estudiantil universitario, con niveles educativos y adquisitivos importantes que se debaten entre ser testigos y consumidores de los beneficios del modelo económico – político y la preocupación por perder capacidades y recursos.

En ese orden de ideas, el proceso de formulación de la política educativa universitaria que incluyó la movilización estudiantil de 2011, puede ser interpretado como un interfaz societal no sólo en términos de confrontación de intereses sociales sino de “informaciones e interpretaciones presentes en las interacciones estratégicas durante el proceso de una política pública” (Roberts, 2001, p. 3). El análisis de los interfaces societales permite un estudio detallado de los cambios de la política así como entender la respuesta de los grupos afectados (Long, 2007), ya que estas interrelaciones son complejas al intervenir “racionalidades, poderes, intereses y relaciones de los actores involucrados no solo en los puntos de su organización interna sino cómo se sitúan y actúan dentro de los dominios institucionales” (Long, 2007, pp. 142–147).

Durante el primer semestre del 2011, aparecen en Colombia acciones colectivas por parte de organizaciones estudiantiles universitarias que sacuden la dinámica de participación política colombiana, la cual se debate entre las acciones violentas de los distintos grupos armados y delincuenciales, y las acciones colectivas aisladas, locales y poco estructuradas de las múltiples organizaciones de base que han venido consolidándose en el país durante las últimas décadas. Por ello, la interpretación de la movilización estudiantil por parte de los sectores políticos y medios de comunicación tradicionales como el inicio de un movimiento social, nos parece aventurado e impreciso frente a los lineamientos y condiciones que un movimiento social debe cumplir para que se pueda categorizar como tal.

Por lo tanto, podemos afirmar “que un movimiento social es un agente de influencia y persuasión que desafía las interpretaciones dominantes sobre diversos aspectos de la realidad, incidiendo así en todos los ámbitos de la política” (Ibarra, Gomà, & Martí, 2002, p. 30). Sin embargo, es importante argumentar que no toda movilización deriva en la formación de un movimiento social, ya que de presentarse este último, debe de superar seis tareas de suma importancia para que sus propósitos tengan impacto en la sociedad, a saber: conseguir nuevos miembros; mantener la moral y el nivel de compromiso de los miembros con los que ya cuenta; conseguir cobertura de los medios de comunicación e idealmente (aunque no necesariamente) favorable a sus puntos de vista; movilizar el apoyo de grupos externos; limitar las opciones de control social que pudieran ser ejercidas por sus adversarios y; finalmente, influir sobre lo político y conseguir que la administración actúe (McAdam, 1999, p. 47).

Así, este artículo pretende hacer una reflexión sobre cómo la forma, organización, duración y magnitud de las movilizaciones evidencia un cambio en la forma en que es ejercida la protesta en un país con debilidades políticas, económicas, simbólicas y organizativas para realizar este tipo de participación política. En ese sentido, la acción del movimiento estudiantil fue más institucionalizada, localizada y estratégica, visibilizando con sus demandas la tensión de dos proyectos políticos: el neoliberal de privatización y el democrático – participativo. En ese orden de ideas, la hipótesis es que la movilización de noviembre de 2011 dirigida y coordinada por los estudiantes de universidades públicas y privadas de Colombia, logró reformular el movimiento estudiantil erigiéndolo como un actor político que aunque tuvo recursos para desafiar a la institucionalidad no logró conformarse como un movimiento social.

Por último, este trabajo se estructuró a partir de una variable dependiente: la participación política estudiantil y dos variables independientes: la primera, la forma organizativa del colectivo estudiantil a partir de estructuras no institucionales e institucionales; la segunda, los repertorios de acción que se activaron durante el proceso de reforma de la ley de educación superior.

Algunas Consideraciones Teóricas

La efectividad de las movilizaciones estudiantiles universitarias nos lleva a preguntar cómo definimos de forma apropiada los hechos acaecidos en Bogotá y en un importante número de ciudades de Colombia. ¿Movilización estudiantil, movimiento estudiantil, movimiento social? A partir de esas preguntas se puede considerar esta movilización desde los Nuevos Movimientos Sociales (NMS) en donde los conflictos o tensiones surgen, como lo afirma (Habermas, 1981), no tanto en las áreas de reproducción material sino que aparecen en áreas de reproducción cultural, integración social y sociabilización. En ese sentido, dan mayor importancia a las identidades y objetivos resultantes de diversas formas de asociacionismo y activismo colectivo con carácter movilizador como afirman Touraine (1981) o Melucci(1985). Así, para los nuevos movimientos sociales el poder político es percibido como menos significativo, y su objetivo en comparación con los viejos movimientos es la movilización de la sociedad, no la toma del poder político.

Así, la movilización se enmarca dentro de la participación política, la cual debe entenderse más allá de la participación electoral y que de acuerdo a la acepción de Pasquino(1995) “es aquel conjunto de actos y de actitudes dirigidas a influir de manera más o menos directa y más o menos legal sobre las decisiones de los detentadores del poder en el sistema político o en cada una de las organizaciones políticas, así como en su misma selección con vistas a conservar o a modificar la estructura (y por lo tanto valores) del sistema de intereses dominantes”.

Las movilizaciones como parte de lo que se conoce como acciones colectivas, de acuerdo a Charles Tilly (1978, pp. 7–10, 52, 55), son procesos deliberados de costo y beneficio que surge del desarrollo de cuatro factores: interés (medible por las ventajas o beneficios que pueden resultar de la acción conjunta), organización (delimitada por las identidades, lazos y solidaridades comunes que aumenten su capacidad de acción coordinada), movilidad (adquisición del control colectivo sobre los

recursos coercitivos, utilitarios y normativos necesarios para la acción), y la oportunidad de aplicarlos para actuar eficazmente.

En ese orden de ideas, la movilización estudiantil universitaria de 2011 se puede entender como una contienda política transgresiva que empleó una acción contenciosa, en la que los estudiantes universitarios en una interacción episódica (5 meses), pública y colectiva, encontraron oportunidades institucionales para su reivindicación, una auto identificación reciente como actores políticos y emplearon acciones colectivas innovadoras. Pese a este potencial de movilización, los estudiantes colombianos no lograron integrar a colectivos u organizaciones sociales diversos que convergieran en su demanda a través de una significativa integración simbólica, aprovechando las dicotomías de dos proyectos políticos en pugna (marcos cognitivos) y su meta no fue anular un cambio social fundamental, sino el retiro de una reforma que se tramitó a través de las instancias normativas e institucionales establecidas en el sistema político.

Aunque la aparición de este tipo de acciones colectivas no constituye por sí misma un movimiento social (Tarrow, 1997, p. 116), sí podemos afirmar que es en las estructuras de movilización y los repertorios de acción donde está la novedad y con ello la posibilidad de convertirse en movimiento social de acuerdo a las dimensiones de McAdam expuesta en párrafos anteriores.

Podríamos afirmar a partir de los elementos teóricos descritos, que lo sucedido entre abril y noviembre de 2011 por parte de los estudiantes universitarios colombianos correspondió no a un movimiento social, pero sí a la aparición de un repertorio contencioso que usó la experiencia de tres décadas de organización estudiantil universitaria pública y privada configuradas como estructuras de reserva (Tarrow, 1997, p. 95), para reformular el movimiento estudiantil e institucionalizar su acción gracias a la creación de la Mesa Amplia Estudiantil Universitaria (MANE).

Ahora bien, es el uso de repertorios de acción novedosos uno de los elementos más llamativos de la movilización estudiantil y donde se rescata la originalidad y la puesta en acción de esta acción política, ya que los “repertorios de acción colectiva hacen referencia a la pluralidad de formas de acción de que disponen los desafiantes. El repertorio es un concepto estructural y .cultural, que incluye no sólo lo que los contendientes “hacen”...sino lo que “saben hacer” y lo que los otros “esperan que hagan” (Tarrow,

1997, p. 59). En ese sentido, los repertorios son un espejo del tiempo y espacio en el que se desarrollan, y a su vez son herramientas que visibilizan las formas culturales de quienes lo elaboran. De esta manera, “la modularidad de un repertorio de acción colectiva implica que puede representarse en diferentes escenarios y momentos, para objetivos diversos y puede difundirse y aprenderse sin demasiadas dificultades” (Iglesias, 2005, p. 76).

Junto a los repertorios de acción colectiva, las formas organizativas que implementaron los estudiantes fueron distintas a las formas tradicionales del movimiento estudiantil colombiano. Aquí destaca la combinación de asambleísmo con formas de decisión más horizontales, la descentralización de la red de la que hacían parte los grupos decisores de cada universidad, y el uso de tecnología los cuales produjeron “un efecto beneficioso en la capacidad organizativa ya que si aumenta la cantidad de recursos discrecionales a disposición de las masas y las élites, aumenta con ello la cantidad absoluta y relativa de los recursos disponibles para el sector de los movimientos sociales” (Della Porta & Diani, 2011, p. 202).

Si bien la movilización logró una coordinación mayor y el enmarcamiento permitió la formación de una identidad estudiantil universitaria, ésta no logró que nuevos grupos de personas distinguibles en la vida social rutinaria participaran en las reivindicaciones (McAdam, Tarrow, & Tilly, 2005, p. 156) y el cambio político social que inició como un punto en la reivindicación fue difuminándose, aunque no desapareciendo por parte de algunos de los grupos estudiantiles que terminaron conformándose durante la movilización misma y la creación de la MANE.

Por último, la movilización hecha por los estudiantes el año pasado demuestra varias cosas para el sistema político colombiano: en primer lugar, la no radicalización de la movilización por parte de los estudiantes, legitimó su reivindicación ante amplios sectores sociales y políticos del país, máxime en un país donde no hay capacidad para formar y mantener movimientos sociales a causa de la violencia característica del país.

En segundo lugar, el uso de la protesta y otro tipo de acciones colectivas que fueron consideradas legítimas por parte de los gobernantes, dieron validez a este tipo de participación que no hubiera sido posible bajo el gobierno pasado. Por último, los resultados macroeconómicos y el sostenido crecimiento de la economía nacional, han brindado oportunidades para la población, especialmente la universitaria,

que ha visto aumentar la cobertura a través de créditos y programas, pero no la calidad en la inserción laboral, la cual se evidencia en la incertidumbre ante las opciones que ofrece el mercado nacional e internacional.

Narrativa Histórica del Movimiento Estudiantil

Cifras sobre la movilización en Colombia afirman que: “después de un pico de más de 500 acciones en 1971 y otro de 797 en 1975, el número de acciones se estabilizó en 408 anuales entre 1977 y 1998, para aumentar a 550 entre 1999 y 2006” (Velasco, 2010, p. 231). En ese orden de ideas, podemos decir que en Colombia sí se presentan abundantes acciones colectivas a pesar de la variable que significa para el sistema político el conflicto armado, situación que dificulta la organización y coordinación de diversas organizaciones sociales en torno a una demanda común que pueda atraer a ciudadanos distintos bajo un sentimiento de desagravio.

Ahora bien, la Constitución política de 1991 marcó un punto de inflexión en el sistema político colombiano al establecerse un Estado Social de Derecho que buscó lograr una mayor democracia política y económica, así como nuevos mecanismos de participación para los diferentes actores sociales (Jácome, 2010, p. 366). La ampliación de la democracia se explica también por los procesos de transición democrática que operaban en el continente, así como el proceso de globalización que permite a los movimientos sociales grados mayores de internacionalización de sus demandas y formas organizativas. Gracias a ello, los Nuevos Movimientos Sociales tomaron mayor vigencia en Colombia en los que los grupos de mujeres, defensa de los derechos humanos y estudiantes tendrán mayor notoriedad nacional e internacional.

Un primer antecedente se encuentra en la movilización estudiantil de 1971 donde fueron actores fundamentales las universidades públicas y algunas privadas como la Pontificia Universidad Javeriana; dicha movilización fue referenciada por los activistas estudiantiles de 2011, como comentó el líder y activista estudiantil Elkin Pérez:

En Colombia nunca hubo una lucha estudiantil tan importante como la del movimiento estudiantil de 1971 y ahora la del año pasado, es decir en 40 años no hubo levantamiento de los estudiantes como el año pasado, en el 71 se concretó una cosa fundamental y era que las iglesias, los empresarios y los contratistas norteamericanos se

retiraran de los consejos superiores universitarios finalmente esa lucha la ganó el movimiento estudiantil en el 71
(E. Pérez, entrevista personal, 30 de marzo de 2012).

Esa movilización estudiantil, con acciones como protestas y paros, paralizó el sector universitario nacional que en medio de la tensión con el gobierno fue elaborando lo que se conoció como el Programa Mínimo del Movimiento Nacional Estudiantil. El documento pedía la reestructuración de la Universidad, aboliendo los Consejos Superiores Universitarios donde había presencia de gremios y clero, asignación del 15% como mínimo presupuesto para la educación nacional, conformación de una comisión y legalización del derecho a crear organizaciones gremiales en cualquier tipo de establecimiento educativo (Pardo & Urrego, 2003, pp. 3–6). Para algunos, el éxito de esta movilización resultó en el cambio de los Consejos Universitarios, y la propuesta de reforma en el contexto ideológico de la Doctrina de la Seguridad Nacional y la polarización del conflicto armado.

Un segundo antecedente de la movilización estudiantil la encontramos en el Movimiento de la Séptima Papeleta, creado en un precario momento respecto a la efectividad del Estado frente a la fortaleza de los grupos armados y delincuenciales del narcotráfico. La muerte de tres candidatos presidenciales para las elecciones de 1990, brindó la oportunidad para que estudiantes de universidades privadas se organizaran en torno a la acción colectiva del 25 de agosto de 1989, llamada la Marcha del Silencio.

Esta acción colectiva permitió la creación del Frente Unido Estudiantil de Colombia (FUEC), órgano que representó los intereses estudiantiles y abrió la realización de mesas de trabajo en distintas universidades a lo largo del país (Quintero, 2002, p. 128). A pesar del entusiasmo inicial, las mesas de trabajo no surtieron el efecto esperado, y al final del semestre se fue debilitando el entusiasmo y la identidad inicial de los estudiantes; sólo la Universidad del Rosario siguió adelante, y con ayuda de profesores de la Facultad de Jurisprudencia, defendió la posibilidad de recolectar firmas para solicitar un plebiscito con el fin de que los colombianos decidieran si querían o no un cambio constitucional. Si bien esta experiencia no logró erigirse en un movimiento social, si visibiliza la potencialidad de la movilización estudiantil colombiana para activar otros procesos dentro del sistema político.

Ahora bien, que las organizaciones estudiantiles de 2011 tomaran como referencia a la movilización de estudiantes de 1971 y en menor medida la de 1991, evidencia no sólo la importancia de éstas para la construcción identitaria, sino que demuestra que los estudiantes han podido mantenerse como actores colectivos en el marco de pequeñas organizaciones ancladas a las dinámicas de las universidades públicas, de algunos partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil. Ejemplo de ello son la cifras del CINEP (2008), donde los datos concluyen que las movilizaciones lideradas por estudiantes han venido aumentando, pasando de 178 entre el periodo de 1991 – 1995 a 253 entre 1996 – 2000, para llegar a 380 entre 2001- 2006. En este orden de ideas, la apertura de oportunidades políticas incrementa la contestación, demostrando que “gobiernos democráticos aceptan niveles más altos de disenso colectivo a la vez que liberan canales de representación” (Velasco, 2010, p. 233).

A continuación, se analizará la marcha de los estudiantes de 2011 haciendo énfasis en la Estructura de Oportunidad Política para la movilización y la forma en que las organizaciones estudiantiles se organizaron para llevar a cabo un repertorio de acciones colectivas diversas y un grado de organización que logró la creación de un organismo como la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE), y el retiro de la propuesta de reforma en noviembre de 2011.

La Movilización Estudiantil Universitaria de 2011

Marzo – Junio. Condiciones para la Estructura de Oportunidades Políticas

En el mes de marzo de 2011, la Ministra de Educación María Fernanda Campo a petición del gobierno, y como parte de un paquete de reformas que buscan mejorar los indicadores de inversión y cobertura del país, se propuso reformar la ley de educación superior que llevaba vigente desde 1992 y que el gobierno estructuró en cuatro pilares: promover la calidad y la investigación; aumentar los recursos para la educación superior, incluyendo el capital privado; tener una educación pertinente en lo regional y competitiva en lo internacional, y garantizar una gestión educativa basada en el buen gobierno. En cuanto a la financiación, la propuesta de reforma buscó incrementar el presupuesto para el sector en 1,5 billones de pesos, (unos 10 millones de dólares) generando 600.000 nuevos cupos en el pregrado y 45.000 en el postgrado, y destinando a las instituciones públicas 420.000 millones de pesos (2.000.000 de dólares) para

generar 95.000 cupos. Además, entre 2012 y 2022 los recursos nuevos llegarán a ser 11.1 billones de pesos unos 5.712 millones de dólares (Múnera, 2011).

Sin embargo, en la misma presentación, el presidente Santos esgrimió un argumento adicional al tema presupuestal que causó divergencias desde su pronunciación dentro del mundo académico: “tenemos la propuesta de crear Instituciones de Educación Superior con ánimo de lucro, de manera que estas instituciones aporten recursos para los fondos de becas y de crédito que benefician a los más pobres”(CVNE, 2011).

Con la propuesta lista, el Ministerio de Educación inició un proceso de divulgación y socialización de la propuesta dentro del marco de una política de consenso que ha sido la impronta del gobierno de Santos, marcando una diferencia con su antecesor. Así, bajo la idea de un diálogo nacional se invitó a organizaciones e instituciones relacionadas con el tema educativo a diálogos sectoriales, mesas de trabajo y foros regionales donde los resultados serían procesados para luego radicarlos en el Congreso durante el segundo periodo legislativo que va desde el 16 de marzo hasta el 20 de junio. Era interés del gobierno hacerlo rápidamente, especialmente para que fuera aprobada la propuesta de las instituciones con ánimo de lucro que contaba con el apoyo de los partidos de la coalición, como el caso del Senador John Sudarsky del Partido Verde que consideraba: “que el Estado está haciendo un esfuerzo considerable para aumentar la financiación de la Universidad pública, pero tiene que experimentar con nuevas alternativas o si no, no va a poder suplir la demanda”(El Espectador 4 de Abril, 2011).

Así, los actores sectoriales representados en el Consejo Nacional de Educación Superior CESU, el Consejo Nacional de Rectores Sistema Universitario Estatal –SUE-, la Comisión Nacional de Aseguramiento de la calidad de la educación superior CONACES, la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN, el Instituto Colombiano para la evaluación de la educación ICFES, el Instituto Colombiano de crédito y estudios técnicos en el exterior ICETEX, el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación COLCIENCIAS, la Asociación Sindical de Profesores Universitarios ASPU y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA se reunieron en diálogos sectoriales durante los siguientes tres meses.

Paralelo a ello, el Ministerio organizó 15 foros regionales en Boyacá, Antioquia, Caldas, Risaralda, Santander, Atlántico, Bolívar, Bogotá y Valle donde se encuentran las universidades regionales más importantes. Aunque fueron invitados a los foros, las organizaciones estudiantiles no tenían en ese momento capacidad alguna para que su voz y propuestas fueran incluidas en este proceso, además de percibir que: “la Ministra era muy agresiva, ella a veces no asistía a las discusiones o iba y salía, se quedaba un rato y se iba, pero el año pasado no hubo un diálogo permanente con la Ministra” (E. Pérez, entrevista personal, 30 de marzo de 2012). En medio de este proceso, las críticas a la propuesta empezaron a manifestarse por parte de los rectores, ejemplo de ello fue la crítica del presidente de la ASCUN, José Fernando Isaza rector de la universidad privada Jorge Tadeo Lozano, cuando afirmó que:

Rechazan la creación de instituciones de educación superior con ánimo de lucro y temen que particulares o empresas compren universidades ya existentes. Así mismo, creen que el modelo de financiamiento de las instituciones públicas debe ser más ambicioso y, contrario a lo que piensa el Gobierno, para los rectores, la propuesta que presentó el presidente Juan Manuel Santos no financia el aumento de cobertura y calidad(Semana 28 de Junio, 2011).

Además, criticó la premura del gobierno por acelerar la reforma: “Esto requiere más discusión. Hay que decirle al Gobierno que espere un poquito, que ajustemos más, que lo miremos más, para ver en qué puntos podemos llegar a acuerdos. Hay plazos que para esta discusión no pueden ser los de un trámite legislativo”(Semana 28 de Junio, 2011). Ni rectores, ni profesores se mostraban de acuerdo con ciertos puntos de la propuesta: primero, el ánimo de lucro; segundo, la financiación de las universidades; tercero la denominación misma entre Universidad e Institutos de Educación Superior; cuarto, la definición dentro de la reforma de la educación como un servicio público y no un derecho; quinto, el tema de la vigilancia e inspección, y por último, el impacto de la educación dentro del sistema laboral bajo la consolidación de un proyecto político y económico neoliberal.

Para las organizaciones estudiantiles, la escasa participación en el proceso de construcción de la política pública se explica a que fue el Estado el que tomó las decisiones controlando las oportunidades institucionales clave para ello y donde no se comparte el poder (Isunza, 2005, pp. 23–24); en otras palabras como anota Leopoldo Múnera en su documento el XYZ de la Reforma a la Ley 30 de 1992: “la

participación de la sociedad se dio en debates destinados a legitimar decisiones previamente adoptadas, la cuales solo sufren retoques en virtud del proceso participativo”.

Un malestar de agravio fue creciendo entre estudiantes, profesores y comunidad académica del país tanto de universidades públicas como privadas. En abril, en el marco del proceso de sociabilización, más no de elaboración de la propuesta de reforma que llevaba a cabo el gobierno, se registran entre el 28 de marzo y 1 de abril de 2011, los primeros disturbios en diversas universidades públicas del país caracterizadas por un viejo repertorio de acción, como uso de capuchas, lanzamiento de piedras a la policía, quema de llantas y uso de papas bombas. Esta primera etapa de disturbios fue coordinada por sectores y activistas radicales, establecidos dentro de las universidades, que causaron daños a la infraestructura en plena discusión sobre el sostenimiento de las mismas, y le dieron oportunidad al Vicepresidente para afirmar: “hay que distinguir lo que es una protesta estudiantil, de un tropel. La capucha y la piedra no pueden ser la expresión de una protesta estudiantil. Colombia debe tener un gran movimiento estudiantil, capaz de contribuir a que las políticas públicas en materia educativa sean cada vez mejores”(Semana 31 de Marzo, 2011).

Si tenemos en cuenta que la estructura de oportunidades políticas hace énfasis en las dimensiones consecuentes, aunque no necesariamente formales o permanentes, del entorno político, especialmente en los recursos externos al grupo (Tarrow, 1997, p. 116) para que se perciba una oportunidad para los desafiantes, encontramos que estas condiciones se estaban dando para los grupos estudiantiles durante 2011. En ese orden de ideas, la figura del Vicepresidente, la colaboración de sectores de los partidos políticos como Polo Democrático Alternativo y Partido Verde, el ciclo de protestas de 2011 y la movilización estudiantil chilena, pueden ser interpretados como recursos externos que activaron las dimensiones de oportunidad, a lo que se sumó, el cambio en el tono y la política de consenso del Presidente Santos frente a sus contradictores, mostrando una desideologización de las respuestas institucionales frente a las acciones colectivas.

Por lo tanto, la Estructura de Oportunidades políticas (EOP) se abrió para este grupo gracias al aumento de las condiciones favorables para la movilización, y ayuda a comprender el modo en que estas movilizaciones plantean desafíos a las élites y autoridades poniendo al descubierto su vulnerabilidad

(Tarrow, 1997, p. 117). Ahora bien, aunque no existe una fórmula que permita saber con certeza cuándo las dimensiones de oportunidad se producen sincrónicamente, en el caso de las movilizaciones de los estudiantes colombianos que se presentaron durante 2011, las estructuras del Estado, como ciertas divisiones políticas, ofrecieron oportunidades o “huecos” que permitieron a actores pobres en recursos (los estudiantes) participar en la acción colectiva (Tarrow, 1997, p. 46), como lo dijo uno de los líderes estudiantiles:

Santos, no es tan agresivo como Uribe sí, es más diplomático le gusta hacer las cosas conversándolas. Además, cuando hay conciencia es más fácil, es decir, los estudiantes eran conscientes de que tocaba movilizarse sino había una protesta una movilización pues, eh, ese proyecto de reforma de la ley 30 podía dañar, eh, a su universidad, entonces además, el estado de ánimo propicio para eso se conjugaron lo que propició la rápida y mediana organización de los estudiantes por universidades (E. Pérez, entrevista personal, 30 de marzo de 2012).

Las dimensiones que permitieron la movilización se analizaran a continuación:

Tabla 1. Oportunidades para la Movilización

Dimensiones	Caso movimiento estudiantil
<i>Incremento del Acceso</i>	Las elecciones legislativas de marzo y las presidenciales de mayo del 2010, fueron significativas para el sistema político colombiano en la medida en que la renovación del Congreso fue parcial, situación que permitió el establecimiento de la Mesa de Unidad Nacional dentro del legislativo, con una alta producción legislativa que llegó a 238 proyectos en los que se destaca la temática social, tal como lo evidenció Congreso Visible “La actividad del legislativo estuvo marcado por proyectos que revivieron las diferencias ideológicas de los partidos respecto a las causas sociales”. Las dos condiciones institucionales incrementaron el acceso y legitimidad a discursos políticos opositores a través de las iniciativas de ley propuestas dentro del Congreso Nacional.

<p style="text-align: center;"><i>Alineamientos Inestables</i></p>	<p>Una de las características del Gobierno de Santos, en clara distinción con la de su antecesor Álvaro Uribe, ha sido la forma de acercarse a sus contradictores políticos y estructurar la acción política gubernamental desde el consenso. Esta decisión ha llevado desde la mitad del 2010 a una gradual separación entre estos dos líderes que se ha evidenciado dentro de los miembros del partido de la Unidad Nacional y dentro de Congreso en la mesa de unidad nacional, así como en otras instituciones gubernamentales. El tratamiento sobre la seguridad, el acercamiento con el gobierno de Hugo Chávez, los proyectos de ley de víctimas, restitución de tierras y el marco de la ley para la paz, son algunos de los espacios donde las diferencias sobre como gobernar son evidentes. Estos hechos y el deterioro cada vez mayor de esa relación han debilitado a los miembros Uribistas de la coalición, pero tampoco han fortalecido al partido de la oposición PDA dentro del Congreso, pero sí dentro de las organizaciones sociales y sindicales que forman el Partido para hacer contrapeso a la facción de los progresistas de Gustavo Petro que se retiró de este partido para conformar el partido progresista para las elecciones locales.</p> <p>La presencia entonces de alineamientos inestables dentro del partido de la U entre Santistas y Uribistas, si bien no es una señal de inestabilidad política, sí debilitó la capacidad de incidencia y maniobra institucional de Uribe dentro del Congreso, dejando espacio para grupos sociales y facciones de los partidos de la coalición para tomar la iniciativa a favor no sólo de lo que debe ser el proyecto político del Estado (la reforma educación superior), sino una ventana de oportunidad dentro de la institucionalidad para los actores sociales.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Élites Divididas</i></p>	<p>La división de élites que se evidencia para este caso se explica desde dos elementos: el primero, ideológico, al separar Santos y su gobierno de una línea ideológica de derecha a una de centro al acercar su discurso de gobierno a temas sociales y reformas estructurales que se necesitan para la transformación y legitimidad del Estado colombiano como el tema de tierras. El segundo, la forma de gobernar tanto a nivel doméstico como internacional, haciendo énfasis en el acercamiento a actores sociales brindando incentivos institucionales para sindicatos, organizaciones y contradictores, debilitando la polarización ideológica presente en el gobierno anterior. En ese orden de ideas, si bien esta dimensión sí estuvo presente en el proceso, este no fue determinante para explicar la formación de la movilización de los estudiantes en el 2011.</p>

<p><i>Aliados Influyentes</i></p>	<p>La presencia o ausencia de aliados políticos dispuestos a ayudar está relacionada con el éxito o el fracaso de los grupos. Así, la conformación de una movilización por parte de los estudiantes contó con el apoyo del PDA en cabeza de los congresistas Camilo Romero, Luis Avellaneda, Alexander López y otros del Partido Verde (E. Pérez, entrevista personal, 30 de marzo de 2012).</p> <p>Además de los aliados en el Congreso, los Rectores de las Universidades públicas y algunas privadas que estaban en desacuerdo con algunos de los elementos de la propuesta de reforma fueron actores importantes, mas no fundamentales, pero actuaron como aliados en el proceso de conformación de la MANE. De otro lado, los sindicatos de profesores, especialmente el FECODE, ayudaron en el acercamiento con los partidos opositores y con los profesores como parte de la movilización. Un último aliado que se fue activando, fueron los estudiantes de las Universidades privadas que se sumaron de forma más definitiva en la tercera fase, la de la movilización. Un aliado final fue el movimiento estudiantil chileno, que en cabeza de Camila Vallejo, visitó Colombia para establecer reuniones con los estudiantes (E. Pérez, entrevista personal, 30 de marzo de 2012).</p>
<p><i>Represión y facilitación</i></p>	<p>Si se considera la represión como cualquier acción por parte de un grupo que eleva el costo de la acción colectiva, podemos afirmar que la llegada de Santos, redujo el costo y facilitó la recomposición de movimientos y organizaciones, que bajo su gobierno de consenso tuvieron facilidad para organizarse, legitimarse y movilizarse. La desideologización en clave amigo/adversario del gobierno, brindó facilidades institucionales para los colectivos para buscar a través de la institucionalidad y el uso no convencional la salida de su voz. Por lo tanto, la represión podemos caracterizarla como baja, y la facilitación alta hacia la movilización estudiantil que en el nuevo marco de profundización de la calidad de la democracia y mejorar los indicadores internacionales de respeto a las libertades dio una interpretación y legitimidad distinta a las movilizaciones</p>

Elaboración Propia

Julio – Septiembre. ¿Cómo nos organizamos?

Abierta la EOP vale preguntarse: ¿En qué momento y cómo los estudiantes se organizaron, lideraron, movilizaron y se convirtieron en actores determinantes de este asunto? Durante estos meses, se dio el proceso de discusión del articulado en diversos foros que propuso el Ministerio donde, en opinión de las organizaciones estudiantiles y ASCUN, no había espacio para la discusión, ya que ellos percibieron que esto era:

Una cosa de trámite, además estaban muy confiados en las mayorías que tiene la unidad nacional para votar por la reforma”, además, el ministerio nos dio periódicos desde donde decían así vamos a difundir la reforma ¿se lee bien? y cuando llegaba la ministra respondía cuando el escenario era difícil y se iba y dejaba a un asesor, el estado no actuó como estado o gobierno para que escuchara las iniciativas (J. López, entrevista personal, 17 abril 2012).

Pero no sólo fue el tema de la forma de sociabilización de la propuesta, estaba también el tema de la poca efectividad de la reforma sobre la financiación y deuda que el estado tiene con las universidades, la cual llega al orden de los 715.000 millones de pesos, a pesar de lo que había logrado la movilización del 2009, donde: “gracias a una marcha regrande pidiendo más presupuesto unos compañeros hablan en el congreso en la plenaria y logran una adición presupuestal de 150.000 mil millones de pesos la mayoría para créditos casi nada a la base presupuestal” (J. López, entrevista personal, 17 abril 2012).

En ese orden de ideas, el tema del ánimo de lucro se fue erigiendo como el elemento de tensión entre los oponentes cuando fue rechazado tanto por el director de la ASCUN, cuando aseguraba que: “ese modelo era perverso y advertían que en los países donde se adoptó este modelo, como Brasil y Estados Unidos, se sacrificó la calidad y la pertinencia de la educación” (Semana 23 de Agosto, 2011), como por los estudiantes, ya que: “iban a convertir a la educación en un negocio, un lucro entonces cualquiera podía fundar una institución de educación superior con ánimo de lucro porque no tenía mayores requisitos según la ley” (E. Pérez, entrevista personal, 30 de marzo de 2012). Frente a esto la Ministra en cabeza del gobierno argumentó que: “Defendía este modelo el cual considero importante para aumentar la cobertura de la educación superior” (Semana 23 de Agosto, 2011).

Así, esas dos posiciones en el sistema político colombiano coexisten a través del clivaje estado/mercado, que da paso a nuevas dialécticas entre regulaciones públicas, mercantiles, asociativas y comunitarias compitiendo por espacios de influencia y conformación, es decir, se transita hacia el espacio de la *governance* (Ibarra et al., 2002, p. 58) donde se expresan valores y concepciones políticas en conflicto que buscan regularlo y articularlo a través de las redes de política pública. En ese sentido, en el mismo proceso de formación de la política pública, como es la reforma a la ley 30, estructuró una red de acción colectiva crítica (la organización estudiantil) que operó en un contexto más complejo y que tuvo una

capacidad de impacto político; además, estas redes de acción crítica tienen a menudo una efectiva inserción en escenarios de política pública, ya que no sólo incorporan, sino politizan los campos de discusión y se conforman como tipos multiorganizativos por su capacidad de conectividad mucho más ajena a las culturas de militancia de la izquierda tradicional (Ibarra et al., 2002, pp. 68–69).

Por lo tanto, durante este proceso se van consolidando dos posiciones, no sólo respecto al rumbo de la educación superior, sino de proyectos políticos en pugna. Mientras el gobierno se mantenía en su posición, en el Congreso Nacional Senadores y Representantes a la Cámara estaban concentrados en el proceso electoral local de octubre de 2011, el cual determinaba las cuotas de poder territorial y local de los partidos políticos. Esto significó un período de lentitud en el ciclo legislativo que afectó el interés del Ministerio de aprobar la propuesta rápidamente en el segundo periodo legislativo.

En este sentido, este tiempo fue un recurso fundamental para los estudiantes que: “desde marzo programaron unos encuentros de emergencia para ver este asunto” (J. López, entrevista personal, 17 abril 2012). La rapidez de la organización estudiantil puede explicarse desde dos hechos: en primer lugar, el número de organizaciones existentes de largo tiempo con personería jurídica y legitimidad ante las instancias académicas correspondientes que según un cálculo del censo de la Organización Colombiana de Estudiantes (OCE), llegaba a más de 300 organizaciones de estudiantes, unas que son nacionales, mientras que hay otras que son de tipo distrital o regional (J. López, entrevista personal, 17 abril 2012), siendo las nacionales las más determinantes al tener capacidad de comunicación y articulación entre ellas, sobre todo después de la movilización de julio a noviembre de 2009.

En segundo lugar, la capacidad que tuvieron las organizaciones de estructurarse como una red de acción crítica, que construyó en el plano simbólico un sistema de códigos (injusticia/privatización/soberanía/paz) que les permitió interpretar una cierta parcela de la realidad a partir de un cuadro alternativo de valores de referencia (Ibarra et al., 2002, p. 72); es decir, expusieron a través de la creación del Programa Minino y la creación de la Mesa Amplia Estudiantil Nacional MANE, un marco de acción que convence de la posibilidad de transformación por medio de un proceso movilizador tal como lo afirma Boris Duarte: “los jóvenes y los estudiantes de Colombia volvimos a

tomar conciencia de que otro mundo no sólo es posible, sino necesario” (El Espectador 9 de Noviembre, 2011).

Así, se propone entre el 20 y 21 de marzo la creación de la MANE, la cual se aprueba por unanimidad, y se programa la primera reunión entre el 20 y 21 de agosto de 2011, cuando se emite su primera declaración y el programa mínimo (J. López, entrevista personal, 17 abril 2012). Dos posiciones en oposición sobre el concepto, definición y contenido político de la reforma a la política pública de educación superior se estructuraron como un campo donde se cruzaron conflictivos puntos de vista sociales, evaluativos y cognoscitivos.

De esta forma, la MANE al igual que en el caso de los estudiantes chilenos, cambió de una estructura organizativa jerárquica vertical (Presidente, Secretario, Tesorero), a una estructurada en forma horizontal a través de varias organizaciones como la Organización Colombiana de Estudiantes OCE, la Federación Nacional de Estudiantes Universitarios, la Asociación Colombiana de Estudiantes, la Federación Universitaria Nacional y el Consejo Nacional Superior Estudiantil de Colombia CONCEC donde las decisiones se toman con transversalidad y existe un uso de vocería y asambleísmo permanente lo que lleva a organizarse en redes y de formas distintas de acuerdo, como lo afirman los voceros estudiantiles:

La MANE se construyó sobre la base de consensos ya han existido escenarios de votación para los 25 voceros pero los acuerdos fundamentales son por consenso así sean muy mínimo en la máxima instancia que es la asamblea plenaria. No se puede votar si hay disenso entonces se lleva al comité operativo que es donde tienen asiento los delegados de la MANE, realmente es demasiado democrática puede ir cualquier persona por eso se trata de consenso (J. López, entrevista personal, 17 abril 2012).

Se resalta la relación del movimiento con los no activistas (estudiantes secundarios/estudiantes universidades privadas/padres de familias/profesores/académicos y trabajadores), que decidieron acompañar las movilizaciones convocadas tal como lo afirmó uno de los líderes del CONCEC:

Había mucho estudiante independiente es decir no organizados que salió a marchar que veían la convocatoria y se movilizaban, es decir, la movilización no podemos decir que el 50% de los estudiantes eran de organizaciones, yo

creo que solo el 5% de los que salieron a marchar eran parte de las organizaciones estudiantiles (E. Pérez, entrevista personal, 30 de marzo de 2012).

Octubre – Noviembre. A la calle con nuevos repertorios de acción

Con la apertura de la estructura de oportunidad política, dos tendencias en oposición se erigieron durante el periodo de comunicación y sociabilización de la reforma, situación que le permitió al colectivo estudiantil organizarse como una red de acción colectiva crítica frente a la modificación de la política pública de educación superior. Esta red crítica (estudiantes), a través de estrategias discursivas orientadas hacia la acción, la incidencia política y el cambio, transitó hacia una red temática de *governance* que extendió su marco alternativo para el apoyo de coaliciones promotoras críticas (rectores, profesores universitarios, trabajadores administrativos, estudiantes universidades privadas, académicos), logrando un gran eco ciudadano y un vínculo entre el proceso movilizador y el entorno social, fortaleciendo su conexión con la opinión pública en la que se evidencia una generación emergente de prácticas de movilización social de nuevo tipo (Ibarra et al., 2002, p. 68), como fue el abrazatón y el besatón.

Ahora bien, el trabajo organizativo de la MANE le dio a la red una capacidad de negociación y presión, que terminó con la creación del Programa Mínimo de la Mesa Amplia el 21 de agosto y la convocatoria a un Paro Nacional Universitario que obligó a una reunión entre los representantes en el legislativo de la Mesa de la Unidad Nacional, y el Presidente Santos el martes 23 de agosto donde: “Le recomendaron retirarlo puesto que no “estaba consensuado”, así como la propuesta que planteaba la inversión de la empresa privada en la universidad pública. Tal vez no es el momento de introducirlo. Nosotros nos habíamos comprometido a que ese proyecto lo presentaríamos cuando estuviera totalmente consensuado” (Semana 23 de Agosto, 2011).

A pesar del retiro del articulado en pleno proceso electoral local con el fin de facilitar su trámite y el de otras iniciativas en el legislativo, el gobierno mantuvo dentro de la reforma artículos referidos a la celebración de convenios entre universidades públicas y el sector privado, así como la inversión en el subsidio a la demanda donde se promueve el crédito y el endeudamiento de estudiantes; dichas iniciativas desde la visión de los estudiantes, dejaban espacio para modificarse en el proceso legislativo a favor del gobierno a través de enmiendas tan pronto el proyecto fuera radicado.

Con el “nuevo” articulado, la Ministra radicó el proyecto en la Comisión sexta de la Cámara de Representantes el lunes 3 de octubre, asegurando que: “habrá más equidad y acceso para los jóvenes más pobres y que a través del proyecto se busca que “el sistema de educación esté a tono con las grandes demandas de un recurso humano cada vez más formado y capacitado” (Semana 03 de Octubre, 2011). Para hacer frente a esto, los estudiantes a través de la MANE establecieron una agenda de movilización en la que la demanda era clara: “retiro o hundimiento de la ley, no más esa ley, no, hay que hundir esa ley (sic), que no prosperará, que no fuera ley de la república” (J. López, entrevista personal, 17 abril 2012).

La organización estudiantil estaba lista para la movilización. La MANE invitó a un Paro Nacional Universitario a 32 universidades del país, y convocó a cuatro movilizaciones nacionales: 12 de octubre, 19 de octubre, 26 de octubre y 27 de octubre, 3 de noviembre y 10 de noviembre que termina con el retiro de la Reforma por parte del gobierno. Fueron entonces estudiantes independientes y activistas estudiantiles quienes establecieron una difusión intrafronteriza con el repertorio de acción que estaban llevando a cabo los movimientos de los indignados en Europa y la movilización de estudiantes en Chile, planteando el uso de repertorios de acción como elementos teatrales, el besatón, el abrazatón o el carnaval de la toma de Bogotá, que rompieron el esquema sobre las movilizaciones al presentar nuevas formas de protesta que fueron legitimadas tanto por el gobierno como por la sociedad.

Este elemento puede explicar el éxito de este tipo de acciones, tal como lo afirman los estudiantes:

Todo tipo de sectores, hasta los que prefieren hacerlo de manera aislada, entendieron que se ponían en jaque el éxito del movimiento con acciones aisladas, a la gente misma, de esa forma en que nos estábamos movilizamos (sic) se avanzaba más rápido que de otras formas”(...) “Fue muy importante y es que además de la lucha de la pelea, el cambio fundamental en las organizaciones fue ese, fue la iniciativa ciudadana una iniciativa estudiantil” (J. López, entrevista personal, 17 abril 2012).

Además, la innovación de la movilización tuvo un efecto inmediato y positivo en los medios de comunicación, que informaron y dieron espacio a los voceros de la MANE para participar en programas radiales y televisivos. De igual forma, la prensa escrita informó de manera diaria las acciones de los estudiantes y el cubrimiento de las movilizaciones que fue importante también dentro de la prensa

regional. Por último, la prensa internacional hizo referencias importantes no solo a la movilización sino a la reforma en sí. En palabras de los estudiantes “yo creo que en general los medios de comunicación jugaron un papel importante” (E. Pérez, entrevista personal, 30 de marzo de 2012).

En ese sentido, las formas organizacionales, el repertorio de acción y el tema de la política pública educativa, fue una temática común en las movilizaciones que se presentaron en Chile, República Dominicana y Puerto Rico, donde se evidencia el accionar de una difusión interfronteriza y un intercambio político transnacional (Tarrow, 1997, pp. 258–261). Por lo tanto, el uso de formas organizativas flexibles y un repertorio de acción novedoso demostraron que los estudiantes colombianos ganaron el pulso frente a su oponente, que decidió retirar la reforma en el Congreso Nacional en noviembre de 2011, con la condición de suspender el paro y que los estudiantes cesaran las marchas, normalizaran las actividades y volvieran a clase. Para la MANE en este momento, “acabábamos de tener una victoria” (J. López, entrevista personal, 17 abril 2012).

Conclusiones

La movilización estudiantil que vivió Colombia durante el segundo semestre del 2011 fue significativa respecto a la forma organizativa, repertorios de acción y estructura de oportunidades políticas, episodio que evidencia un cambio en la forma en que la protesta es entendida y codificada por parte de los entes institucionales. Sin embargo, aunque la movilización logró reformular el movimiento estudiantil erigiéndolo como un actor político, no logró conformarse como un movimiento social, en la medida en que fue un sector único de la sociedad que no pudo integrar a colectivos sociales diversos, no fue continuo, sino se estableció en el contexto del proceso de la reforma a la educación superior; no logró una significativa integración simbólica, aprovechando las dicotomías de proyectos políticos en pugna, y su meta consistente no fue anular un cambio social fundamental, sino el retiro de una reforma que se tramitó a través de las instancias normativas e institucionales establecidas en el sistema político.

En primer lugar, la complejidad del sistema político, producto de la internacionalización de la economía y la globalización, ha generado fuertes presiones de cambio, donde los gobiernos transitan de gobiernos rígidos a escenarios de *governance* en los que la sociedad es actor determinante tanto en el dictamen como en la gestión de las políticas públicas. En ese orden de ideas, los estudiantes se

estructuraron como una red de acción colectiva crítica que tuvo capacidad de impacto político. Además, la red tuvo una efectiva inserción en escenarios de política pública y estructuró formas de organización múltiple, que rompían la institucionalizada estructura organizativa jerárquica vertical por una horizontal donde se combinaban medios tradicionales, redes sociales, junto con la vocería, el asambleísmo, comités operativos horizontales, la transversalidad de las decisiones y la creación de la MANE.

En segundo lugar, el uso de repertorios de acción novedosos fue uno de los elementos más llamativos de la movilización estudiantil; el abrazatón, el besatón o el carnaval, rompieron con el uso de repertorios radicales y brindó recursos, legitimidad y conexión a la protesta estudiantil. La estrategia en el repertorio extendió su marco alternativo para el apoyo de coaliciones promotoras críticas (rectores, profesores universitarios, trabajadores administrativos, estudiantes universidades privadas, académicos), logrando un gran eco ciudadano y un vínculo entre el proceso movilizador y el entorno social, además de innovar en las prácticas culturales para otros colectivos.

En tercer lugar, el colectivo estudiantil universitario percibió que las estructuras del Estado colombiano ofrecieron oportunidades o “huecos”, que les permitieron a actores pobres en recursos (los estudiantes) participaren la acción colectiva y plantear desafíos al gobierno. Por lo tanto, la figura del Vicepresidente, la colaboración de sectores de los partidos políticos como Polo Democrático Alternativo y Partido Verde, el ciclo de protestas de 2011 y la movilización estudiantil chilena, fueron recursos externos que activaron las dimensiones de la estructura de oportunidad política (EOP); a ello se sumó el cambio en el tono y la política de consenso del Presidente Santos frente a sus contradictores, mostrando una desideologización de las respuestas institucionales frente a las acciones colectivas.

Aunque la acción colectiva llevada por los estudiantes no se puede considerar aún como un movimiento social, sí tuvo un gran impacto que se puede entender desde cuatro aspectos: el primero interactivo, al emerger un nuevo actor político; el segundo simbólico, al estructurarse como una red de acción crítica que construyó un sistema de códigos comunes (injusticia/privatización/soberanía/paz); el tercero, institucional, al crear mecanismos estables de negociación como fue la Mesa Amplia Nacional de Educación MANE y por último sustantivo, al empujar cambios en las políticas gubernamentales como fue la suspensión del proceso de formulación e implementación de la ley 30 de educación superior.

Por último, la protesta estudiantil fue un híbrido de asambleísmo tradicional del estudiantado de izquierda colombiano con innovaciones en los mecanismos deliberativos y de decisión, con una puesta en escena no violenta, uso de nuevos repertorios y comunicación en red, que les permitió desmarcarse de lo meramente revolucionario e integrar y seducir a los sectores públicos y privados, desde el estudiantado hasta el debate académico e intelectual de prensa que no ha cesado.

Referencias

- CVNE. (2011). Reforma al sistema de educación superior en Colombia. *Centro Virtual de Noticias de la Educación*. Retrieved July 28, 1BC, from <http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-propertyvalue-45239.html>
- Della Porta, D., & Diani, M. (2011). *Los Movimientos Sociales*. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas & Editorial Complutense.
- El Espectador 4 de Abril. (2011). ¿Vía libre a reforma en educación superior? *El Espectador*. Bogotá. Retrieved from <http://www.elespectador.com/noticias/actualidad/vivir/via-libre-reforma-educacion-superior-articulo-260968>
- El Espectador 9 de Noviembre. (2011). La resurrección del movimiento estudiantil. *El Espectador*. Bogotá. Retrieved from <http://www.elespectador.com/impreso/vivir/articulo-310381-resurreccion-del-movimiento-estudiantil>
- Habermas, J. (1981). New Social Movements. *Telos*, 1981(49), 33–37. doi:10.3817/0981049033
- Ibarra, P., Gomà, R., & Martí, S. (2002). Redes de acción colectiva crítica e impactos políticos. In P. Ibarra, R. Gomà, & S. Martí (Eds.), *Creadores de Democracia Radical. Movimientos Sociales y Redes de Políticas Públicas* (pp. 57–80). Barcelona: Editorial Itaca.
- Iglesias, P. (2005). Un Nuevo Poder en las Calles. Repertorios de Acción Colectiva del Movimiento Global en Europa. De Seattle a Madrid. *Política y Sociedad*, 42(2), 63–93. Retrieved from <http://revistas.ucm.es/index.php/POSO/article/view/POSO0505230063A/22902>
- Isunza, E. (2005). Interfaces socioestatales y proyectos políticos. La disputa entre rendición de cuentas y participación ciudadana desde la perspectiva de la igualdad compleja. In A. Monsiváis (Ed.), *Políticas de Transparencia: Ciudadanía y Rendición de Cuentas* (pp. 17–30). Mexico D.F.: Instituto Federal de Acceso a la Información Pública & Centro Mexicano para la Filantropía.
- Jácome, F. (2010). Movimientos sociales, reforma y democracia en la región andina. In F. Jácome & M. Tanaka (Eds.), *Desafíos de la Gobernabilidad Democrática: Reformas Político Institucionales y Movimientos Sociales en la Región Andina* (pp. 365–388). Lima: INVESP/IEP/IDRC.
- Long, N. (2007). *Sociología del Desarrollo: Una perspectiva centrada en el actor*. Mexico D.F.: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social & El Colegio de San Luis.
- McAdam, D. (1999). *Political Process and the Development of Black Insurgency 1930-1970* (2nd ed.). Chicago: University of Chicago Press.
- McAdam, D., Tarrow, S., & Tilly, C. (2005). *Dinámica de la contienda política*. Barcelona: Editorial Hacer.

- Melucci, A. (1985). The Symbolic Challenge of Contemporary Movements. *Social Research*, 52(4), 789–816. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/40970398>
- Múnera, L. (2011). El XYZ de la Reforma a la Ley 30 de 1992 (Ley de Educación Superior). Bogotá. Retrieved from http://www.ing.unal.edu.co/progsfac/civil_agricola/images/stories/Civil__Agricola/ley_30/el_xyz_de_la_reforma.pdf
- Pardo, M., & Urrego, M. (2003). El movimiento estudiantil de 1971 en Colombia. In *Primer Congreso Internacional sobre Historia de las Universidades de América y Europa, July 10-12*. Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba.
- Pasquino, G. (1995). Participación política, grupos y movimientos. In G. Pasquino, S. Bartolini, M. Cotta, L. Morlino, & A. Panebianco (Eds.), *Manual de Ciencia Política* (pp. 179–215). Madrid: Alianza Universidad.
- Quintero, O. A. (2002). Sociología e Historia del movimiento estudiantil por la Asamblea Constituyente de 1991. *Revista Colombiana de Ciencia Política*, 7(2), 125–151. Retrieved from <http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/recs/article/view/11164>
- Roberts, B. (2001). Las Nuevas Políticas Sociales en América Latina y el Desarrollo de la Ciudadanía: Una perspectiva de interfaz. Wageningen. Retrieved from <http://lanic.utexas.edu/project/etext/llilas/claspo/workingpapers/unaperspective.pdf>
- Semana 03 de Octubre. (2011). Reforma a la Ley de Educación Superior ya está en el Congreso para su trámite. *Revista Semana*. Retrieved from <http://www.semana.com/nacion/articulo/reforma-ley-educacion-superior-esta-congreso-para-su-tramite/247381-3>
- Semana 23 de Agosto. (2011). Asesinan a dirigente de sindicato de universidades de Córdoba. *Revista Semana*. Retrieved from <http://www.semana.com/nacion/articulo/asesinan-dirigente-sindicato-universidades-cordoba/245349-3>
- Semana 28 de Junio. (2011). “Si se quiere aumentar cobertura y calidad, eso cuesta”: José F. Isaza. *Revista Semana*. Retrieved from <http://www.semana.com/nacion/articulo/si-quiere-aumentar-cobertura-calidad-cuesta-jose-f-isaza/242107-3>
- Semana 31 de Marzo. (2011). “La capucha y la piedra no pueden ser la expresión de una protesta estudiantil.” *Revista Semana*. Retrieved from <http://www.semana.com/nacion/articulo/la-capucha-piedra-no-pueden-expresion-protesta-estudiantil/237696-3>
- Tarrow, S. (1997). *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*. Madrid: Alianza Editorial.
- Tilly, C. (1978). *From Mobilization to Revolution*. New York: Random House.
- Touraine, A. (1981). *The voice and the eye: An analysis of social movements*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Velasco, M. (2010). Democracia, gobernabilidad y movimientos sociales en Colombia: 1990-2006. In F. Jácome & M. Tanaka (Eds.), *Desafíos de la Gobernabilidad Democrática: Reformas Político Institucionales y Movimientos Sociales en la Región Andina* (pp. 213–244). Lima: INVESP/IEP/IDRC.